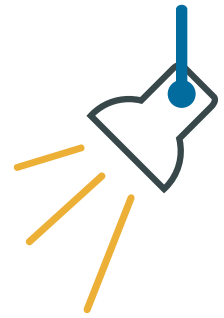


Septiembre de 2024
Número 12

Accountability Note



Después del acuerdo: Implementando remediación por el desplazamiento en el norte de Haití

Scott Freeman
Lani Inverarity
Megan Pearson



Acerca del Centro de Investigación en Rendición de Cuentas (ARC)

El Centro de Investigación en Rendición de Cuentas (o ARC, del inglés *Accountability Research Center*) tiene su sede en la School of International Service de la American University. El ARC crea puentes entre la investigación y las perspectivas de primera línea para aprender de las ideas, instituciones y personas que promueven estrategias para mejorar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Para más información, consulte www.accountabilityresearch.org.

Acerca de las publicaciones del ARC

Las publicaciones del ARC sirven de plataforma para que los estrategas e investigadores de la rendición de cuentas compartan sus experiencias y puntos de vista con una diversa variedad de lectores y aliados potenciales de distintas áreas temáticas y sectores. Estas publicaciones enmarcan iniciativas locales y nacionales distintivas en términos que abordan cuestiones clave en el campo de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Para más información, consulte www.accountabilityresearch.org/publications.

Derechos y permisos



El material de esta publicación está protegido por derechos de autor bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 Unported (CC BY 4.0). Si traduce esta publicación a otro idioma, por favor agregue el siguiente descargo de responsabilidad junto con la atribución: Esta traducción no fue creada por el Accountability Research Center (ARC) y el ARC no se hace responsable de ningún error de traducción.

Favor cite la obra de la siguiente manera: Freeman, Scott, Lani Inverarity, y Megan Pearson. 2024. "Después del acuerdo: Implementando reparaciones por el desplazamiento en el norte de Haití." *Accountability Note* 14. Accountability Research Center. <https://doi.org/10.57912/26893930>.

Foto de portada: Marie Marthe Rocksaint, una pequeña agricultora, se vio obligada a abandonar su tierra cuando inició la construcción del Parque Industrial Caracol. Su familia fue una de 422 familias que perdieron sus tierras cuando el parque recibió el visto bueno.

Crédito: Marilia Leti/ActionAid

Contents

Resumen	5
Introducción: “El sueño de un loco”	6
Antecedentes: Desplazamiento y daño.....	8
La estrategia de rendición de cuentas	11
¿Un acuerdo innovador?	14
La lucha por la implementación	15
Retrasos en la administración de la opción de tierras	16
Desafíos de la implementación de compromisos ambientales y sociales.....	17
La importancia de la monitorización.....	17
Lecciones para la rendición de cuentas.....	20
Conclusión	24
Referencias	28

Sobre los autores

Scott Freeman es profesor asistente en la School of International Service de la American University. Es antropólogo y realiza trabajo de campo etnográfico sobre la ayuda, el medio ambiente y el contexto laboral en zonas rurales de Haití. Sus escritos suelen centrarse en los problemas sociales y económicos que genera la burocracia de ayuda en las áreas de implementación. Tiene un doctorado en antropología aplicada por la Universidad de Columbia.

Lani Inverarity es la directora de Programas y Estrategia de Accountability Counsel (AC). Antes de ocupar este cargo, Lani pasó más de cinco años brindando apoyo directo a cientos de agricultores en Haití que fueron desplazados por la construcción del Parque Industrial Caracol. También ha trabajado apoyando a comunidades en Colombia, Kenia, Mongolia y Ucrania. Lani recibió una maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de Yale y está admitida como abogada y procuradora del Tribunal Superior de Nueva Zelanda.

Megan Pearson es subdirectora de Políticas en Accountability Counsel (AC), una organización sin fines de lucro que apoya a comunidades de todo el mundo en la defensa de sus derechos humanos y el medio ambiente a través de mecanismos de rendición de cuentas en instituciones financieras de desarrollo. Su trabajo se centra en fortalecer las políticas de las instituciones financieras respecto a la remediación de los impactos ambientales y sociales negativos asociados con sus inversiones. Antes de unirse a AC, trabajó en el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití. Recibió su título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de Yale y pertenece al Colegio de Abogados del Distrito de Columbia.

Agradecimientos

Los autores agradecen a los numerosos colaboradores que han hecho posible esta publicación. A Milostène Castin, cuyo incansable trabajo organizativo en nombre de los pequeños agricultores haitianos ha logrado tanto a pesar de enfrentar obstáculos increíbles. A Megumi Tsutsui, Samer Araabi y Sara Jaramillo, por su dedicado trabajo en solidaridad con el *Kolektif* de agricultores haitianos desplazados, y por proporcionar información valiosa a lo largo de la redacción de este proyecto. A Joseph Wendy Alliance, Alix Percinthe, Yolette Etienne, y Antoine Bouhey de la Federación ActionAid por su trabajo en solidaridad. A Remixon Guillaume, traductor y mucho más desde 2016. A Karen Brock, por su paciencia y apoyo durante un largo proceso de redacción colaborativa. A Jonathan Fox, por presentarnos a todos los colaboradores y motivarnos a publicar este trabajo. A Kathryn O'Neill, por su labor editorial, así como al equipo más grande del ARC por su apoyo. A Juliana Marín Fryling, por la traducción del inglés al español. A David Hunter y Brian Concannon, quienes proporcionaron comentarios reflexivos y cuyo profundo conocimiento institucional e histórico mejoró enormemente el documento. Sobre todo, los autores expresan su profundo respeto y admiración por todo el *Kolektif*, con quienes ha sido un privilegio trabajar durante tantos años.

Cualquier error o deficiencia en esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores.

Resumen

En enero de 2011, más de 400 familias en el noreste de Haití fueron desalojadas de sus tierras agrícolas para dar paso al Parque Industrial Caracol (PIC), una gran instalación textil industrial financiada principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de los Estados Unidos.

Este Accountability Note (informe de rendición de cuentas) relata el notable camino de las familias haitianas en su búsqueda de una solución para su desplazamiento. Contra todo pronóstico, se organizaron, buscaron apoyo internacional para su caso y, utilizando el mecanismo independiente de rendición de cuentas (o IAM, del inglés *independent accountability mechanism*) del BID, finalmente negociaron un acuerdo con el BID y el Gobierno haitiano para restaurar sus medios de vida. Sin embargo, su lucha no terminó allí.

Gran parte de la lucha por la remediación se produjo después de la firma del acuerdo, una realidad que a menudo pasa desapercibida por los defensores de la rendición de cuentas. El apoyo de los defensores locales e internacionales fue fundamental para lograr incluso una implementación parcial del acuerdo. Desde el principio, las posibilidades de éxito de las familias haitianas eran escasas: pocos mecanismos independientes de rendición de cuentas (IAM) tienen la capacidad o el mandato de facilitar cualquier recurso. Además, el caso Caracol representa un caso extremadamente raro en el que una comunidad desplazada ha utilizado con éxito un IAM para negociar tierras de reemplazo. Sin embargo, para muchas familias, los retrasos en la remediación se prolongaron durante años, lo que aumentó el sufrimiento y exacerbó las pérdidas económicas y sociales que conlleva la pérdida de tierras. El seguimiento y la incidencia política han sido necesarios durante los seis años posteriores a la firma del acuerdo. Debido a eso, muchas de las familias finalmente recibieron compensación, incluidas tierras en algunos casos.

Aunque llegar a un acuerdo para remediar el daño es a menudo el objetivo de un proceso en un mecanismo de rendición de cuentas, esta publicación destaca la lucha que ocurre después de la firma de un acuerdo. Asegurar que la remediación prometida realmente se cumpla requiere una incidencia y vigilancia continua. Este documento ofrece lecciones clave para las comunidades y los defensores que buscan obtener una solución a través de la resolución de disputas en los IAM:

Lección 1: La firma de un acuerdo de remediación no marca el final del proceso, sino el inicio de otra lucha.

Lección 2: El monitoreo y la incidencia continuos son fundamentales para la implementación de los acuerdos de remediación.

Lección 3: Los acuerdos de remediación deben prever posibles desafíos para su implementación.

Aunque Haití presenta un entorno político y económico desafiante para implementar un acuerdo de remediación, las lecciones de este caso no son exclusivas de este país. A medida que los bancos de desarrollo operan cada vez más en contextos de fragilidad y crisis, es probable que surjan obstáculos similares para la remediación en otras regiones.

Introducción: “El sueño de un loco”

Cuando perdimos nuestra tierra, fue como si nos cortaran las manos. Fue una especie de muerte en vida. No podíamos trabajar. No podíamos alimentar a nuestros hijos. No podíamos pagar para que nuestros hijos fueran a la escuela. No teníamos otras fuentes de ingresos.

**Eva Jean Baptiste, una de las lideresas del Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè
(Colectivo Campesino de Víctimas de la Tierra en Chabert)**

En enero de 2011, más de 400 familias del noreste de Haití fueron desalojadas de sus tierras agrícolas para dar paso al Parque Industrial Caracol (PIC), una gran instalación textil industrial financiada principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La abrupta pérdida de sus tierras agrícolas, y con ellas de sus medios de vida, dejó a las familias incapaces de satisfacer sus necesidades básicas. En respuesta, se organizaron bajo el nombre de *Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè (Kolektif)* y, en diciembre de 2018, después de años de incansables esfuerzos, reuniones y negociaciones, firmaron un acuerdo histórico con el BID y el Gobierno haitiano para restaurar sus medios de vida.¹



Vista aérea del Parque Industrial Caracol, rodeado de tierras de cultivo.

Crédito: Google Earth, Maxar Technologies

El proceso de resolución de disputas que condujo al acuerdo comenzó en enero de 2017, cuando el *Kolektif* presentó un reclamo ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, una oficina independiente dentro del Grupo BID establecida para recibir quejas de las comunidades sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales de los proyectos financiados por el BID.² En todo el ámbito de las finanzas para el desarrollo se han creado MICI y otros mecanismos similares de reclamos no judiciales, y cada vez más en otros sectores (Acumen Capital Partners 2024; ANZ Banking Group Limited 2024; WWF 2024). Estos mecanismos se han establecido en respuesta a las brechas de rendición de cuentas creadas por diversas barreras, incluidas las inmunidades legales para organizaciones internacionales, que impiden a las comunidades buscar recursos judiciales efectivos por el daño causado por proyectos financiados internacionalmente (Bradlow 2005; Suzuki y Nanwani 2005). Estas oficinas son de suma importancia para las comunidades que tienen pocas opciones, pero también presentan desafíos significativos. Pocos IAM tienen la capacidad o el mandato de proporcionar algún recurso, y llegar a un acuerdo a través de un IAM es increíblemente raro (Park 2022). El proceso de denuncia es difícil de gestionar sin el apoyo de defensores externos, e incluso si se llega a un acuerdo, su implementación y cumplimiento requieren una defensa continua (Genovese et al. 2016).

El acuerdo de 2018 fue el resultado de una estrategia de rendición de cuentas que un miembro de la comunidad denominó “el sueño de un loco”. En este caso, y contra todo pronóstico, la denuncia condujo al MICI a facilitar un proceso de diálogo entre representantes del *Kolektif*, el BID y el Gobierno haitiano. Después de 18 meses de diálogo, las tres partes firmaron un acuerdo final destinado a apoyar la restauración de los medios de vida de los agricultores, y a mejorar la gestión de los riesgos ambientales y sociales en el PIC (Accountability Counsel 2018; MICI 2019).

Sin embargo, llegar a un acuerdo resultó ser solo un paso hacia la obtención de remediación para las personas que habían sido desplazadas por el PIC. La implementación del acuerdo no ha sido sencilla y ha estado marcada por retrasos significativos. Las barreras burocráticas, como el complejo proceso para facilitar las transferencias de tierras, han ralentizado sustancialmente la implementación, causando dificultades adicionales a las familias desplazadas. A partir de 2020, dos años después de la firma del acuerdo, la pandemia de COVID-19 retrasó aún más la implementación. Los confinamientos a nivel nacional en respuesta a la corrupción gubernamental dificultaron aún más el movimiento de bienes y servicios, al igual que el creciente poder de las pandillas, el aumento de la inflación y el costo del combustible. Estos retrasos en la implementación han causado un sufrimiento real a muchos miembros de la comunidad.

A pesar de todos estos obstáculos, el *Kolektif* sigue presionando para la plena implementación del acuerdo. Ante la adversidad extrema, su lucha ha logrado que muchos miembros de la comunidad reciban los beneficios prometidos. Su caso arroja luz sobre los desafíos de buscar remediación por violaciones de derechos humanos y ambientales en general, y más específicamente, sobre los mecanismos de rendición de cuentas en las instituciones financieras internacionales (IFI) (véase Johnston 2000).

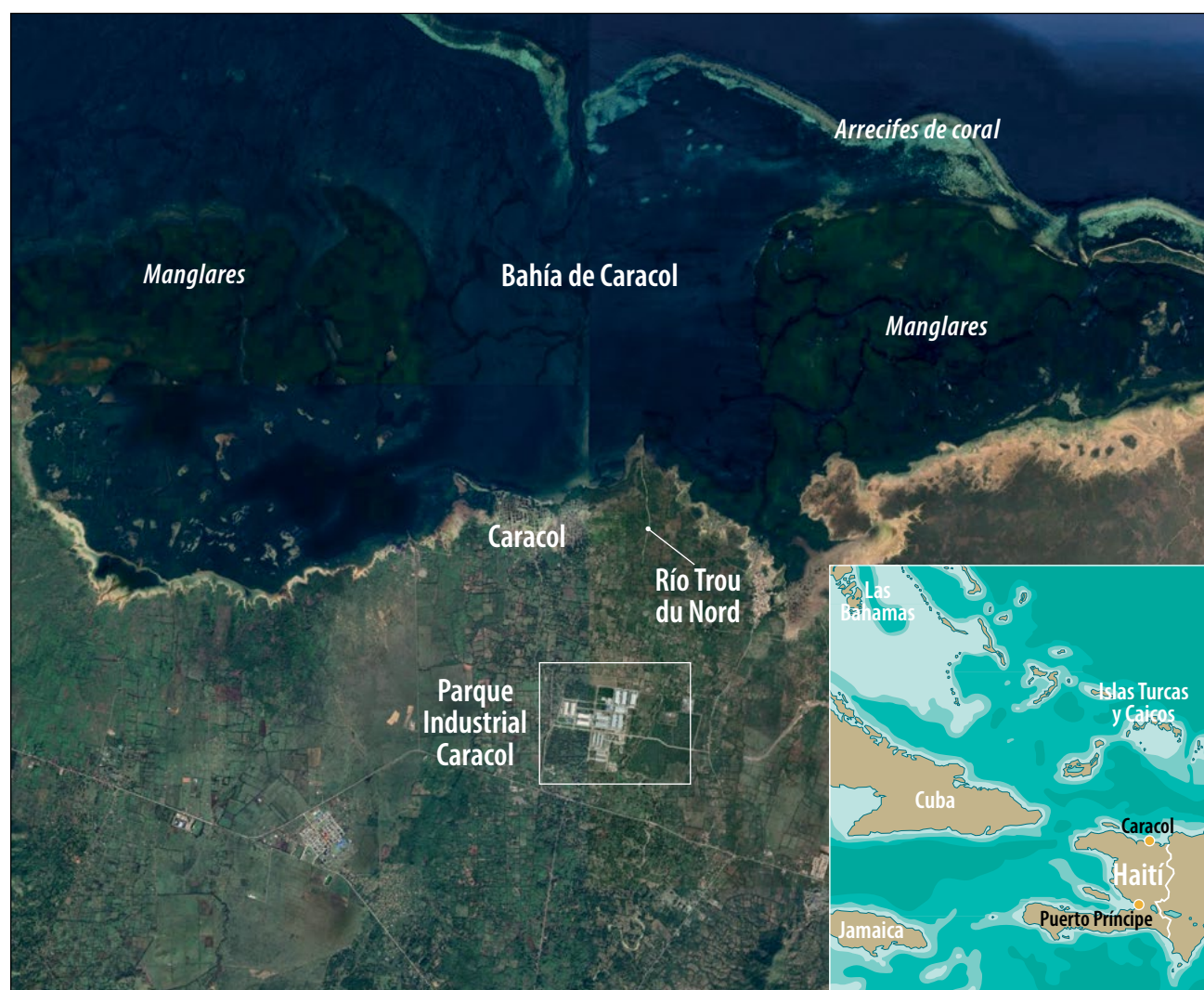
Este Accountability Note (informe de rendición de cuentas) establece la importancia de persistir continuamente en el monitoreo, la incidencia política, la presentación de informes públicos y la presión después de los acuerdos de remediación alcanzados a través de la resolución de disputas en las IFI. Sin un seguimiento posterior al acuerdo, es poco probable que la remediación se materialice. Por lo tanto, las organizaciones y los grupos de incidencia deben presupuestar y planificar su participación en incidencia a largo plazo, apoyando a las comunidades en la búsqueda de una solución a través del proceso de resolución de disputas de una IFI.

Las lecciones de este caso no son exclusivas de Haití. A medida que los bancos de desarrollo operan cada vez más en contextos de fragilidad y crisis (BID 2023; Grupo del Banco Mundial 2024), es probable que enfrenten obstáculos similares para la remediación en otros lugares. El contexto político y económico de Haití es único, pero condiciones como el aumento de la inflación, la crisis de salud pública, la inestabilidad gubernamental y la violencia generalizada existen en muchos otros estados en los que invierten los bancos multilaterales de desarrollo. Por lo tanto, las lecciones del caso *Kolektif* son aplicables mucho más allá del contexto haitiano.

Antecedentes: Desplazamiento y daño

El PIC es un parque industrial de 250 hectáreas, orientado a la exportación, que se dedica principalmente a la fabricación de prendas de vestir. Cuenta con una serie de edificios industriales y administrativos, instalaciones de almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos y líquidos, una central eléctrica de diez megavatios (MW) y su infraestructura asociada. Está ubicado en el departamento Noreste de Haití, aproximadamente a cuatro kilómetros tierra adentro de la bahía de Caracol, un ecosistema sensible de manglares costeros, pastos marinos, bahías y arrecifes de coral que se extiende desde Cap Haïtien hasta la República Dominicana.³ Desde 2011, el PIC fue construido y administrado inicialmente por la Unidad Técnica de Ejecución (UTE) del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití. En mayo de 2014, la responsabilidad de su gestión se transfirió a SONAPI (Empresa Nacional de Parques Industriales), pero regresó a la UTE en 2019 debido al bajo desempeño de SONAPI (ver Alphonse 2019; BID s.f.a).

Figura 1. Parque Industrial Caracol en Haití y región circundante



Crédito: Google Earth

Prometiendo hasta 60 000 empleos,⁴ la construcción del PIC se aceleró después del devastador terremoto de enero de 2010 en Haití. A medida que la respuesta al terremoto pasó por alto en gran medida al gobierno y se dirigió a los actores internacionales, el PIC y su propuesta de creación de empleo se convirtieron rápidamente en el proyecto insignia de la recuperación tras el terremoto (Johnston 2024). Lejos del epicentro del terremoto en Puerto Príncipe, el PIC fue parte de un plan más amplio para convertir el norte de Haití en un centro de comercio.

El PIC fue un proyecto que unió los intereses de múltiples partidos internacionales; recibió un importante apoyo financiero y político del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Bill y Hillary Clinton (en aquel momento secretaria de Estado), USAID y la aprobación de la Comisión Provisional para la Recuperación de Haití (Johnston 2024; USAID s.f.; Müller-Poitevien 2012). Cheryl Mills (en aquel momento jefa de Gabinete de la secretaria Clinton) ayudó a facilitar la asociación con la empresa manufacturera coreana Sae-A, que recibió millones de dólares de incentivos para abrir la fábrica en Haití (Johnston 2024). Las conexiones políticas del proyecto continuaron beneficiando a los actores incluso después de la construcción: tras su salida del Departamento de Estado, Mills fundó una empresa de infraestructura llamada Blacklvy que recibió respaldo financiero de Woong-ki Kim, el jefe de Sae-A (McIntire 2016). En medio de esta maraña de intereses políticos, el BID financió el PIC desde sus primeras etapas, y sigue haciéndolo a través de subvenciones, con un total aproximado de \$ 264,5 millones de dólares estadounidenses, además de múltiples adjudicaciones de cooperación técnica (BID s.f.b).

A pesar del alto perfil financiero y político del proyecto, el BID realizó una escasa debida diligencia en las primeras etapas. José Agustín Aguerre, gerente del Departamento de País del BID en Haití en ese momento, declaró que la “urgencia del proyecto” requería tomar algunos atajos. “Si uno tuviera que seguir el proceso normal de planificación, luego financiación y luego toma de decisiones, y después recién empezar a buscar clientes y solo luego de eso comenzar la construcción, pasarían 10 años y aún no tendríamos parque industrial” (ver Sontag 2012).

El sitio del PIC fue elegido a fines de 2010 con base a una evaluación de prefactibilidad de 18 sitios potenciales financiada por el BID (BID s.f.c). Dicha evaluación, realizada por una empresa que nunca había pisado la zona, tenía fallas críticas. No incluyó un análisis ambiental y social completo, y describió erróneamente el sitio del PIC como “desprovisto de habitación y cultivo intensivo” (Koios Associates 2010, 55–57).

En realidad, el sitio del PIC se ubicaba en excelentes terrenos agrícolas que eran cultivados en parcelas por aproximadamente 422 familias. Esto representaba a casi 4 000 personas que dependían de las tierras de cultivo para su sustento.⁵ Una tardía Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), realizada apresuradamente a mediados de 2011 después de que las familias ya habían sido desalojadas, reveló que,

... el terreno del sitio elegido es el más fértil de toda la zona, incluso en temporada seca. También es la fuente de ingresos para muchos ocupantes que no tienen otra actividad que cultivar la tierra. Familias enteras dependen de estas parcelas para alimentar a sus hijos y pagar las tasas escolares y los costos de atención médica y saldar deudas... Culturalmente, algunas familias han habitado esta tierra durante varias generaciones. Estos ocupantes han desarrollado lazos naturales con la tierra y ciertos hábitos de nutrición. Casi todos los días, durante todo el año, cosechan plantas o verduras que contribuyen a su dieta.

Koios Associates 2011⁶



El agricultor Etienne Robert, de Caracol, frente al muro fronterizo del PIC que dividió su tierra por la mitad.

Crédito: Marilia Leti, ActionAid

El proyecto desplazó a las familias de sus tierras con no más de unos pocos días de aviso (Chérestal 2015; Gender Action 2013).⁷ El Estado haitiano retiró a las familias para dar paso al PIC sin haber desarrollado primero un Plan de Acción de Reasentamiento, y no tomó todas las demás medidas de debida diligencia y consulta requeridas por la Política Operativa de Reasentamiento Involuntario del BID.

Posteriormente, los consultores del BID, junto con la UTE, se apresuraron a desarrollar un Plan de Acción de Reasentamiento tardío y un paquete de compensación. Sin embargo, este proceso se vio empañado por problemas significativos (Kolektif 2017). En primer lugar, la consulta con la comunidad afectada se limitó a una asociación de los llamados “líderes naturales” seleccionados por consultores del BID, los cuales no eran representativos de los agricultores desplazados. Además, la información sobre el proyecto y el Plan de Acción de Reasentamiento nunca se compartió con los agricultores en un formato apropiado (teniendo en cuenta las bajas tasas de alfabetización de los agricultores) ni considerando el idioma (la información se escribió en francés en lugar de en criollo haitiano). El BID y la UTE no lograron identificar y mitigar adecuadamente el importante riesgo de empobrecimiento derivado de las circunstancias individuales de los agricultores en combinación con las características generales del desplazamiento y las precarias condiciones de vida de muchas personas en el campo haitiano. Las dos organizaciones tampoco investigaron ni mitigaron adecuadamente los impactos diferentes y desproporcionados del desplazamiento en las mujeres.

Quizás lo más crítico es que el BID y la UTE no identificaron con exactitud el número de personas desplazadas, no cuantificaron con precisión sus pérdidas y no determinaron adecuadamente la disponibilidad de tierras alternativas.

Finalmente, el BID y la UTE abandonaron el Plan de Acción de Reasentamiento cuando resultó demasiado difícil identificar tierras alternativas para las familias. En su lugar, ofrecieron un paquete inferior de compensación en efectivo y dejaron a las familias con la carga de encontrar terrenos adecuados de reemplazo por sí mismas. Aunque este paquete de compensación inicial fue inadecuado en muchos sentidos, los agricultores sintieron, en general, que no tenían más opciones: si no lo aceptaban, no recibirían nada.

Decidieron citarnos a una reunión y nos dijeron: “Les vamos a dar dinero”. Yo no quería firmar. Dije: “Ese no es el dinero que nos prometieron dar para que pudiéramos comprar tierras en las que podamos trabajar para ayudar a nuestros hijos”.

Remy Augustin, uno de los líderes del Kolektif

Los agricultores tenían motivos para desconfiar del proceso. A pesar de la importancia económica de la agricultura en Haití, los pequeños agricultores han sido históricamente marginados; reciben escasos beneficios de programas de bienestar social, se encuentran entre los más pobres de sus comunidades e históricamente han estado sujetos a desplazamientos sancionados por el Estado (Shamsie 2012; Trouillot 1990).⁸ Los agricultores desplazados por el PIC eran muy conscientes de un patrón de confiscación injusta de tierras, tanto en el propio sitio del PIC como en las comunas y departamentos cercanos. Históricamente, su tierra, *Tè Chabè*, había sido confiscada para plantaciones de azúcar y sisal, y fue expropiada durante la ocupación estadounidense de Haití, que comenzó en 1915. En resumen, esa tierra fue parte de una larga historia de desplazamiento y recuperación (Joos 2023). En este contexto, los agricultores comenzaron a organizarse.

Cuando vimos cómo nos había cambiado la vida, tuvimos una reunión en 2014... Este parque, en lugar de ayudarnos a seguir adelante, había empeorado nuestra vida... Así que decidimos crear el Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè, nos reunimos, votamos por el cambio, dijimos que no podemos quedarnos así, tenemos que denunciar para reclamar nuestros derechos y nuestros deberes.

Jocelyn Prévil, una de las lideresas del Kolektif

La estrategia de rendición de cuentas

Desde abril de 2014, con el apoyo de la organización local de la sociedad civil (OSC) *Action pour la Reforestation et la Défense de l'Environnement* (AREDE), los agricultores empezaron a reunirse en grupos grandes para compartir sus experiencias, identificar colectivamente las fallas en el proceso de desplazamiento y planificar una estrategia para exigir una solución. Durante esas reuniones, los agricultores decidieron formar un colectivo, el *Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè*. Eligieron un comité de liderazgo compuesto por diez personas de entre sus miembros, conocido como el *Komite*.

El *Kolektif* seleccionó líderes que residían en todas las zonas clave afectadas por el PIC, para que cada uno pudiera movilizar a los miembros que tuviera más cercanos utilizando los métodos apropiados para cada zona (teléfono, puerta a puerta, anuncios de la iglesia). Este grupo de líderes electos también variaba en edad, nivel educativo, género y antecedentes, garantizando así la representación de las diversas necesidades e intereses del *Kolektif*.

El *Komite* y el *Kolektif* eran conscientes de que, al buscar una solución en nombre de los agricultores, existía el riesgo de conflicto social en dos niveles: dentro del *Kolektif*, debido a que los miembros tienen diferentes necesidades e intereses; y en la comunidad en general, ya que otros grupos afectados por las operaciones del PIC estaban fuera del alcance de la estrategia del *Kolektif*. Para minimizar ese riesgo de conflicto, tomaron tres medidas: crearon comités para anticipar o responder a posibles disputas y trabajar para maximizar la equidad; el *Komite* y AREDE realizaron una campaña de sensibilización con amplios sectores de la sociedad civil; y se aseguraron que las reuniones siempre fueran abiertas y transparentes.

El *Kolektif* definió sus principales demandas a través de un largo proceso de consulta. En primer lugar, el *Komite*, compuesto por diez personas, desarrolló una lista de exigencias propuestas basadas en una serie de reuniones grupales a gran escala con el *Kolektif*, así como en entrevistas individuales con 58 cabezas de hogar y consultas

con organizaciones comunitarias locales. Luego, finalizaron las demandas en una reunión con 210 miembros del *Kolektif*, a través de un debate abierto seguido de una votación al estilo caucus, donde se pidió a los participantes que indicaran su preferencia por ciertas soluciones agrupándose en diferentes rincones de la sala. Las soluciones con muy poco apoyo fueron excluidas de la lista final de demandas.⁹

Para contrarrestar el desequilibrio de poder entre los campesinos y las grandes IFI, el *Kolektif* tomó la decisión deliberada de formar una coalición de asesores locales, nacionales e internacionales. Esos asesores aportaron experiencia específica en varios ámbitos: organización comunitaria (la organización haitiana AREDE), campañas de investigación e incidencia (ActionAid Haití) y procesos de resolución de disputas y quejas en instituciones financieras (Accountability Counsel). El *Kolektif* investigó estrategias legales, pero finalmente las abandonó por varias razones, incluida la falta de confianza en el sistema judicial local, la falta de recursos del *Kolektif* y sus socios, y las inmunidades legales que protegen a las IFI de los litigios. Afortunadamente, ActionAid tenía conocimiento de los mecanismos de quejas no judiciales. A mediados de 2016, se contactó con Accountability Counsel para obtener asesoramiento sobre las posibilidades de utilizar dicha estrategia en este caso.



Los representantes de la comunidad y Lani Inverarity de Accountability Counsel preparan su caso para buscar remediación.

Crédito: Accountability Counsel

Desde el principio, los miembros del *Kolektif* tenían claro que deseaban continuar con el diálogo como medio para resolver sus preocupaciones. Querían tener la oportunidad de compartir su experiencia directamente con los inversores del PIC y con su propio Gobierno. Y, lo más importante, querían tener un lugar en la mesa para participar con voz y voto cuando se diseñara y discutiera cualquier solución. Un proceso de diálogo facilitado a través del mecanismo de rendición de cuentas del BID ofrecía ambas oportunidades, con un grado de formalidad que el *Kolektif* esperaba que protegiera a los agricultores de los impactos más negativos del desequilibrio de poder y creara las condiciones para una negociación más exitosa. Aunque USAID también fue un importante financiador del PIC, no contaba con un mecanismo de rendición de cuentas a través del cual se pudieran abordar las quejas por daños ambientales y sociales.¹⁰ Por lo tanto, el *Kolektif* decidió buscar la resolución de disputas únicamente a través del BID.

El 12 de enero de 2017, el *Kolektif*, con el apoyo de AREDE, ActionAid y Accountability Counsel, presentó una queja detallada ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID para exigir rendición de cuentas y remediación por los daños causados por su desplazamiento (*Kolektif* 2017). La queja también detallaba las preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales de las operaciones del PIC, incluyendo la contaminación de fuentes vitales de agua y la presión sobre los recursos locales provocada por la afluencia de trabajadores a la zona. Entre marzo y junio de 2017, el MICI visitó Haití (Puerto Príncipe y Caracol) y se reunió varias veces con el *Kolektif*, el BID y el Gobierno haitiano para evaluar la elegibilidad de la denuncia y la viabilidad de un proceso de diálogo. En junio de 2017, después de que el BID expresara su voluntad de participar en el diálogo con el *Kolektif* (mientras que el Gobierno haitiano inicialmente fue más reacio), el MICI determinó que el proceso debía comenzar (MICI s.f.). En octubre de 2017, se celebró en Haití la primera de seis reuniones de diálogo (cada una de dos días) con representantes del BID, el Gobierno haitiano, el *Kolektif* y sus asesores. Entre reuniones formales, se avanzó en 19 acciones provisionales acordadas (MICI 2019). Este proceso de diálogo culminó finalmente con el acuerdo de diciembre de 2018.



El *Kolektif* se reúne para escuchar noticias y dar comentario durante el proceso de negociación.

Crédito: Accountability Counsel

La colaboración entre el *Kolektif*, AREDE y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) internacionales fue fundamental para el éxito del proceso de resolución de disputas. Alcanzar un acuerdo no fue una tarea menor, y el proceso para lograrlo no fue sencillo. La evidencia muestra que el apoyo de organizaciones locales e internacionales en la redacción de denuncias y la navegación del proceso del mecanismo de rendición de cuentas tiende a mejorar significativamente la probabilidad de que el reclamo de una comunidad tenga éxito (ver Jaramillo 2023). Sin embargo, incluso con el apoyo de las OSC locales e internacionales, el proceso de presentar una denuncia ante un mecanismo independiente de rendición de cuentas resultaba agotador. En algunos casos, acceder y navegar por el proceso fue tan difícil y agobiante que las OSC perdieron la esperanza en él (Accountability Counsel y Arab Watch Coalition 2022).

¿Un acuerdo innovador?

El acuerdo de diciembre de 2018 representa el primer reclamo formal contra un banco de desarrollo internacional que obtiene una promesa de remediación para las comunidades haitianas.¹¹ El caso es único porque pocos mecanismos independientes de rendición de cuentas (IAM) están estructurados de manera que puedan facilitar la remediación, y muchos ni siquiera están obligados a hacerlo. En este caso, el IAM, el banco y Haití, como país prestatario, continuaron participando en el proceso durante toda la implementación. A nivel mundial, es uno de los pocos ejemplos en los que las comunidades desplazadas han podido utilizar el mecanismo de rendición de cuentas de una institución financiera internacional (IFI) para negociar tierras de reemplazo. Hasta 2024, de las 208 quejas presentadas ante un mecanismo de rendición de cuentas que resultaron en algún tipo de acuerdo de remediación, solo cuatro ofrecieron nuevas tierras para las comunidades, y de esos compromisos, solo se ha confirmado el cumplimiento de uno (Accountability Console s.f.). Aunque las 422 familias del *Kolektif* deseaban recibir tierras para reemplazar lo que habían perdido, el acuerdo negociado solo prometía parcelas de tierra para 100 familias. Incluir terrenos como una opción de remediación, aunque fuera solo para unas pocas familias, fue un logro muy disputado. El *Kolektif* tuvo la difícil tarea de priorizar a las 100 familias más necesitadas para recibir tierras. En total, el acuerdo permitió a cada hogar afectado elegir una de las cuatro opciones de remediación:

- Tierras
- Equipo agrícola (incluidas bombas motorizadas de agua y riego)
- Capacitación y financiamiento para pequeñas empresas
- Becas vocacionales

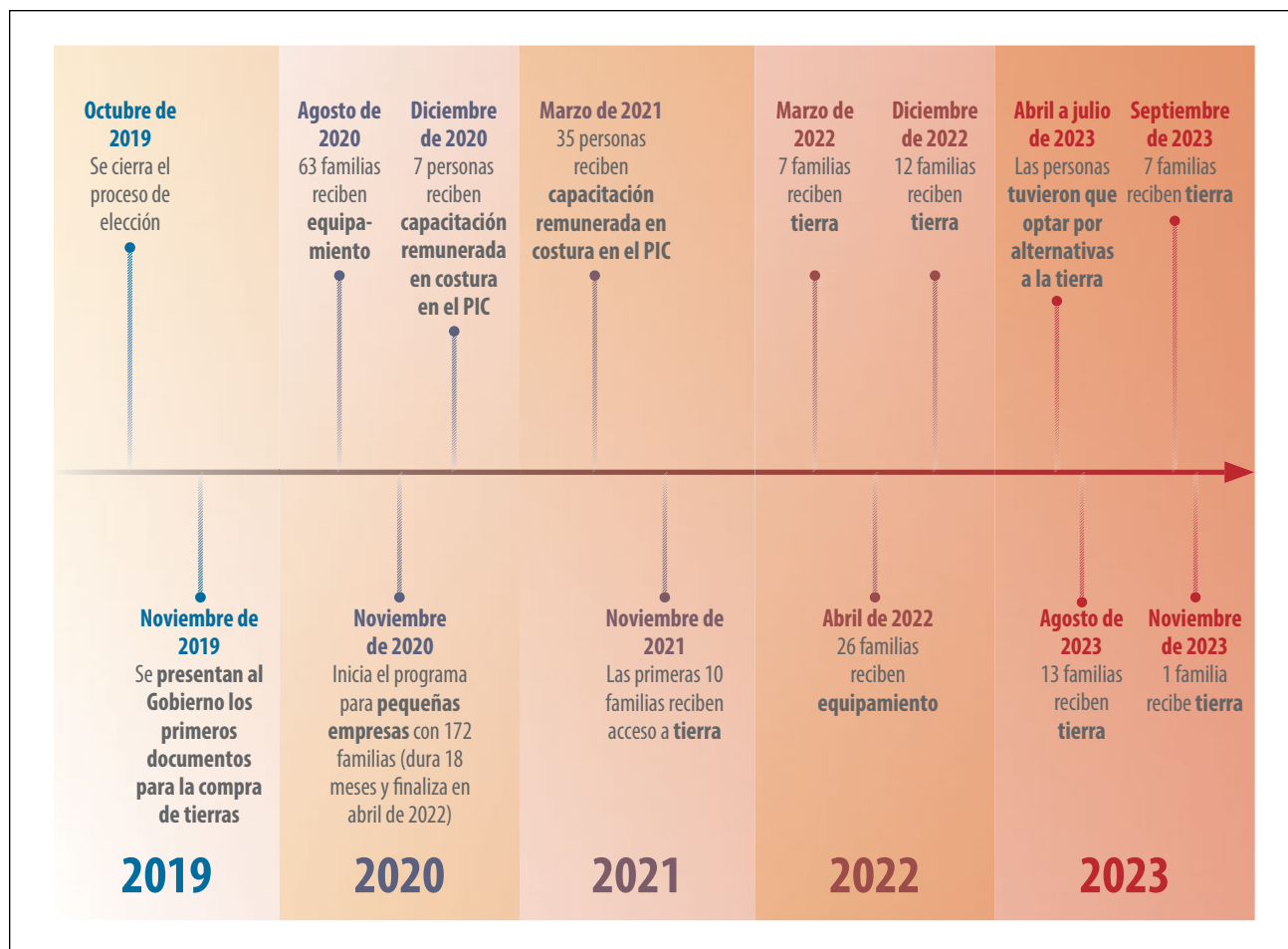
El acuerdo prometía beneficios adicionales. Cada familia del *Kolektif* tuvo la oportunidad de nominar a un miembro para ser considerado para un empleo en el PIC. Cada familia también recibió mochilas y kits escolares, aunque el banco tuvo que reemplazar el 90 por ciento de las mochilas porque eran de tan mala calidad que se rompieron después de solo unos días de uso. Además, el BID se comprometió a mejorar la gestión de los impactos sociales y ambientales más amplios del PIC, incluyendo el tratamiento de aguas residuales, la eliminación de residuos sólidos y el fomento de la participación comunitaria.

La firma del acuerdo y la inclusión de la provisión de tierras fueron un gran logro para los agricultores haitianos desplazados. Aun así, las partes tuvieron que hacer concesiones para llegar al acuerdo, por lo que este no satisfizo todas las demandas del *Kolektif* ni otorgó todos los derechos que les correspondían según las políticas del BID.¹² A medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que la firma del acuerdo era solo el comienzo de la lucha por la remediación.

La lucha por la implementación

Las partes empezaron a trabajar en la implementación del acuerdo en febrero de 2019. Para octubre de 2019, el *Kolektif* había decidido quién recibiría cada opción de recurso, y muchos beneficiarios empezaron a recibir sus opciones elegidas a fines de 2020, un año y medio después de la firma del acuerdo. En agosto de ese año, 63 familias recibieron el equipo agrícola solicitado. Tres meses después, comenzó la primera fase del programa de pequeñas empresas con 172 familias. Para fines de 2020, 67 beneficiarios habían recibido capacitación en corte y costura para apoyar su posible empleo en el PIC.

Figura 2. Después del acuerdo: Un cronograma de la remediación para las familias desplazadas de Caracol



No obstante, importantes desafíos obstaculizaron la implementación de otros aspectos del acuerdo. Los obstáculos administrativos en la implementación de la opción de tierras causaron grandes retrasos, lo que prolongó el sufrimiento de muchos de los más vulnerables del *Kolektif*. Estas demoras administrativas se vieron agravadas posteriormente por las crecientes crisis sociales, económicas y políticas en Haití. Además, a pesar del monitoreo e incidencia continuos por parte del *Kolektif* y sus defensores, se ha avanzado poco para abordar los impactos ambientales y sociales negativos de las operaciones del PIC.

Retrasos en la administración de la opción de tierras

Hasta noviembre de 2021, casi tres años después de la firma del acuerdo, ninguno de los 100 beneficiarios designados para recibir tierras las había recibido. Un factor significativo que retrasó la entrega de tierras fue el engorroso proceso administrativo necesario para recibir un cheque del Gobierno haitiano destinado a comprar terrenos de reemplazo. Primero, las familias debían encontrar terrenos públicos o privados disponibles. La parcela seleccionada luego tenía que someterse a una compleja auditoría burocrática que involucraba a distintas entidades del Gobierno haitiano. Luego, los cheques para compra del terreno, que debían ser firmados oficialmente por el director de la UTE, tenían que ser entregados en mano y notarizados en persona. Como resultado, los beneficiarios de tierras a menudo debían esperar meses para recibir un cheque tras informar a la UTE que habían encontrado una parcela adecuada.

Estos retrasos no se previeron en el momento de la firma del acuerdo. Las ventas privadas de tierras en Haití suelen seguir un proceso menos formal y más rápido, con mínima intervención estatal. Sin embargo, el proceso estipulado por el acuerdo sometió a las personas a una revisión más exhaustiva de lo que exige la ley local.¹³

El retraso en el desembolso de los cheques dificultó especialmente la compra de terrenos privados. Como explicó un beneficiario, nadie vende tierras en Haití a menos que se encuentre en una situación económica desesperada. La venta de tierras es un último recurso que se utiliza solo cuando se necesita efectivo inmediato para una emergencia. Por ello, para muchos beneficiarios que habían identificado tierras privadas para comprar, el lento proceso de la UTE resultó en que la tierra se vendiera a otro comprador con efectivo disponible. Para algunas personas, este ciclo frustrante se repitió varias veces.¹⁴ Un beneficiario expresó su consternación por los retrasos en la entrega de tierras: “Cuando prometieron darnos tierras, yo tenía 50 años, pero ahora tengo 55 y ya no puedo realizar las mismas labores que antes”. El retraso de cinco años significaba que él era menos capaz físicamente de cultivar la tierra y no podría usarla de manera efectiva como fuente de ingresos.

La inconsistencia en el mantenimiento de registros por parte de la UTE presentó otra barrera administrativa para los beneficiarios de tierras. Aunque el *Kolektif* seleccionó a 100 personas para recibir tierras, en 2022 se dieron cuenta de que solo 97 habían sido registradas por el Gobierno haitiano. Para ese entonces, los retrasos significativos en la administración de la opción de la tierra habían hecho que muchas personas se rindieran y seleccionaran una remediación alternativa.

Pero, para al menos una de las familias excluidas, la promesa de tierra había dado falsas esperanzas e inspirado decisiones de vida basadas en una realidad que nunca llegaría. La familia había planeado cómo les ayudaría la compensación: Mondesir¹⁵ eligió la bomba de agua y su esposa eligió la opción de la tierra. De esa manera, tendrían tanto tierra como riego, una gran mejora ya que la mayoría de la tierra en Haití está regada por la lluvia. Sin embargo, la esposa de Mondesir murió inesperadamente después de muchos años costosos luchando contra la diabetes. La opción de la tierra debería haber pasado a los hijos de su esposa, pero cuando su hija intentó reclamarla, descubrió que el nombre de su madre había quedado fuera de la lista del Gobierno de beneficiarios elegibles. A partir de 2022, Mondesir estaba alquilando un terreno para usar la bomba que había recibido. Pero, debido a la crisis de combustible en curso, el combustible era caro y difícil de conseguir. En última instancia, Mondesir se quedó tratando de hacer funcionar una bomba con combustible que no tenía, en tierras que no le pertenecían.

Los retrasos en la remediación plantean una serie de desafíos importantes para las personas desplazadas. Primero, extienden su condición de campesinos carentes de tierra. La tierra es, a menudo, la única fuente de capital para los agricultores haitianos; sin ella, tienen pocas formas de generar ingresos. Un retraso en la provisión de tierras u otra fuente de ingresos hunde a las familias aún más en la pobreza extrema. En segundo lugar, el retraso en la provisión de tierras impide que las familias cultiven sus propios alimentos. Su mayor dependencia de la compra de productos alimenticios los hace especialmente vulnerables a las crisis económicas, como las que experimentó Haití durante el período de implementación del acuerdo. Finalmente, los retrasos tienden a perjudicar más a las personas más

vulnerables. En el caso de Caracol, el *Komite* había decidido que las 100 familias más necesitadas recibirían tierras a través del proceso. Los retrasos en la obtención de esta tierra significaron, perversamente, que las desigualdades dentro del *Kolektif* se exacerbaban en lugar de disminuir.

Si bien la implementación de las ventas de tierras se estancó en 2019 y 2020, las condiciones políticas y económicas en el país se deterioraron considerablemente, reduciendo aún más el ritmo de implementación. Aunque la violencia pandillera a menudo se encontraba lejos de las zonas rurales del norte de Haití, los efectos más grandes de un país con parálisis económica y seguridad en declive afectaron tanto la vida cotidiana como la efectividad del acuerdo de remediación. En particular, la escasez y el aumento del precio del gas incrementaron el precio de los productos alimenticios. Con las protestas contra la administración de Jovenel Moïse llegó la estrategia *peyi lok* (confinamiento del país), que detuvo el transporte, haciendo que todos los precios se dispararan. En 2022, bandas armadas se apoderaron de la principal terminal de combustible del país después de que se anunciara un fuerte aumento en los precios del gas. Como resultado, el gas no solo era caro, sino que tampoco estaba disponible. A su vez, la inflación desenfrenada y la escasez de combustible afectaron la eficacia de algunas de las opciones de remediación. Por ejemplo, los beneficiarios de la opción de pequeña empresa ya no tenían los medios para comprar productos para vender. Además, aquellos que recibieron bombas de agua en el acuerdo ya no podían hacer funcionar las bombas para regar sus tierras, ya que no había combustible accesible.

Desafíos de la implementación de compromisos ambientales y sociales

Hasta el día de hoy, los compromisos del BID para mejorar los impactos ambientales y sociales de las operaciones del PIC han permanecido en gran medida sin implementar. El *Kolektif* sigue expresando su preocupación de que las prácticas inadecuadas de tratamiento de aguas residuales del parque industrial estén contribuyendo a la contaminación de recursos hídricos vitales, incluido el río Trou-du-Nord. También temen que las cantidades de basura y desechos sólidos generados por el PIC, y quemados con frecuencia, sigan representando riesgos ambientales, de salud y de incendio para la comunidad circundante. Además, una serie de impactos sociales han sido preocupaciones apremiantes durante años, desde las condiciones de trabajo en el PIC hasta la infraestructura, que se ha deteriorado a medida que la población local ha crecido, en gran parte debido al atractivo del empleo potencial en el PIC. A pesar de su proximidad a estos impactos, el *Kolektif* ha tenido muy pocas oportunidades para expresar sus quejas y ha recibido muy poca información sobre los esfuerzos actuales o los planes futuros para monitorear o mitigar dichos impactos.

La importancia de la monitorización

El monitoreo continuo de la implementación del acuerdo ha permitido a las partes reconocer y responder a los retrasos identificados. Desde 2019 el monitoreo se ha llevado a cabo en varios niveles: por el mecanismo de rendición de cuentas (MICI), los defensores internacionales y los mismos representantes de la comunidad.

El MICI tiene el mandato de monitorear la implementación de los acuerdos alcanzados a través de su proceso de resolución de disputas por un período de hasta cinco años (MICI 2014). Sin embargo, en este caso, cinco años no fueron suficientes para garantizar la plena implementación, por lo que el MICI aprobó una solicitud formal para extender el monitoreo hasta finales de 2024. El papel de monitoreo del MICI incluye la realización de visitas al sitio del proyecto, entrevistas con las partes involucradas en el acuerdo y la recopilación de información de otras partes interesadas. Elabora informes de monitoreo al menos una vez al año para la Junta Directiva del BID, los cuales se publican en el sitio web del MICI. La publicación de estos informes ha proporcionado al *Kolektif* una ventaja crucial para presionar al Gobierno haitiano a avanzar en el acuerdo. Tras varias visitas de monitoreo a Caracol, el MICI publicó informes que demostraban que, casi tres años después de la firma del acuerdo, ninguna de las familias a las

que se les prometió tierra la había recibido. Utilizando estos informes, el *Kolektif* y sus defensores presionaron con éxito al BID para que condicionara una ronda posterior de financiamiento para el PIC a que el Gobierno haitiano permitiera la venta de tierra para al menos diez familias (BID 2021).

Los defensores internacionales desempeñaron un papel esencial en el seguimiento del impacto del acuerdo sobre los medios de vida de los agricultores. Este estudio en curso está siendo llevado a cabo por Accountability Counsel, con la colaboración de Scott Freeman. Después de que las 422 familias desplazadas eligieron entre las cuatro opciones de remediación en 2019, los defensores entrevistaron a una muestra de 28 personas para establecer una línea de base de sus condiciones económicas y sociales. Las entrevistas de seguimiento en 2021 y 2022 evaluaron la entrega de los beneficios del acuerdo y cualquier cambio en los medios de vida de las personas. Aunque las primeras entrevistas fueron en persona, los seguimientos se realizaron a través de llamadas telefónicas o Skype debido a la pandemia y a la crisis de seguridad en Haití.

Estas entrevistas realizadas por Accountability Counsel y Scott Freeman revelaron el alcance y los impactos de los retrasos en la implementación, y proporcionaron la base para ejercer mayor presión sobre el BID y el Gobierno haitiano para avanzar en la implementación. La ronda de entrevistas de monitoreo, realizada en el apogeo de la crisis de combustible a fines de 2021 y principios de 2022, indicó que la implementación casi se había detenido y que la calidad de vida de los beneficiarios había disminuido en diversos indicadores. Las siguientes áreas fueron de particular preocupación para los entrevistados:

Alimentación: Mientras que la mayoría de los encuestados informó haber comido dos veces al día antes de ser desplazados, esta frecuencia disminuyó precipitadamente a fines de 2021 y principios de 2022. Las personas reportaron estar consumiendo un poco más de una comida al día en promedio: “Cuando se puede, como algo una vez al día. Dos veces no”. Sin tierra para producir alimentos, debían depender de la compra de productos alimenticios. A lo largo de las entrevistas, la diversidad de alimentos consumidos disminuyó a medida que las personas recurrieron a alimentos básicos como el maíz y el arroz importado de Estados Unidos, que ha llegado a dominar el consumo de alimentos en Haití (Cohen 2013). A medida que aumentaron la inflación y el precio del combustible, los productos alimenticios importados se volvieron mucho más caros. A menudo, las familias que tenían dificultades para poner comida en la mesa se aseguraban de que los niños comieran primero, lo que significaba que los adultos de la familia pasaban hambre.

Ingresos: Los ingresos fueron una lucha continua para muchos beneficiarios, especialmente para aquellos que recibieron subvenciones para iniciar una pequeña empresa. Una de las personas entrevistadas mencionó que cualquier capital de la inversión se evaporó rápidamente: “Recibí dinero y comencé un pequeño negocio vendiendo pequeños dulces, jabón, pan. Pero todas las ganancias del negocio las he tenido que gastar [para el consumo]. No queda nada.” Otra beneficiaria de una subvención para pequeñas empresas tenía la intención de utilizar la subvención para comprar y vender artículos de belleza. Sin embargo, en julio de 2022 explicó que el difícil contexto económico le obligó a usar los fondos para gastos básicos del hogar, como alimentos y enviar a los niños a la escuela. Ella y otros se vieron obligados a recurrir a la producción de carbón. Esta es una estrategia de ingresos utilizada únicamente por aquellos en mayor necesidad económica, y proporciona solo un beneficio monetario mínimo a los fabricantes de carbón (Tarter et al. 2018). Sin tierra para cultivar, el capital empresarial tuvo que utilizarse para cubrir necesidades básicas, y encontrar pequeños trabajos para llegar a fin de mes se convirtió en una necesidad.

Empleo: La oportunidad de empleo en el PIC se incluyó como parte del paquete de medidas correctivas para las familias. Sin embargo, el empleo no proporcionó beneficios significativos para muchos. En primer lugar, muchas personas tuvieron dificultades para conseguir trabajo en el parque industrial, ya que debían ser seleccionadas por la administración del parque. La situación mejoró cuando el *Kolektif* logró que el BID y la UTE proporcionaran acceso a un programa de capacitación laboral en el PIC, lo que aumentó las tasas de empleo y proporcionó

habilidades laborales a quienes participaron. A pesar de esto, la tasa de empleo de los beneficiarios en el PIC ha sido extremadamente baja; a principios de 2024, solo 70 personas habían sido contratadas. No obstante, el *Kolektif* presionó por otra ronda de capacitación en confección y, en una importante concesión, el BID acordó organizar una más para 2024.

En segundo lugar, aquellos que obtuvieron empleo no encontraron que su remuneración proporcionara un impulso económico significativo. Una persona entrevistada tenía un hermano empleado, pero señaló que el salario apenas alcanzaba para pagar el almuerzo en el parque, y mucho menos para beneficiar a una familia numerosa. Además, aquellos empleados encontraron el trabajo extremadamente difícil, citando malas condiciones de trabajo, acoso sexual y salarios muy bajos (Zabludovsky 2022). Una persona entrevistada comentó que tanto los supervisores expatriados de alto nivel como los supervisores haitianos trataban mal a los empleados, llegando a decir que eran tratados como “esclavos” y que, sin un sindicato efectivo, no tenían forma de expresar sus preocupaciones..



Una empleada que sale del Parque Industrial Caracol.

Crédito: Accountability Counsel

Un contexto marcado por las crisis

El contexto de la crisis económica y política en Haití ha tenido un impacto significativo en la implementación del acuerdo. Sin embargo, el aumento del autoritarismo y la crisis económica y política no son exclusivos de Haití. En muchos aspectos, Haití es similar a otros contextos en los que las instituciones financieras internacionales (IFI) financian megaproyectos que reorganizan la tierra, la propiedad y las relaciones sociales. El debilitamiento de las instituciones estatales que no responden a las necesidades o derechos de los ciudadanos es una realidad política común en muchos de los países donde operan las IFI. En última instancia, los procesos de rendición de cuentas de las IFI deben considerar estos contextos y cómo los retrasos en la provisión de soluciones agravan los impactos en las personas cuyas vidas y medios de vida se ven afectados por sus proyectos.

Lecciones para la rendición de cuentas

Después de 2022, la implementación del acuerdo recobró cierto impulso. Ha habido avances, pero para algunas familias la solución sigue siendo difícil de alcanzar. De las 100 familias que eligieron recibir tierras, solo 97 fueron consideradas elegibles por el Gobierno haitiano para recibirlas. De estas, 55 han recibido tierras. Muchos de estos beneficiarios también recibieron semillas y herramientas a tiempo para la temporada de siembra de 2023, lo cual, según informaron, fue un beneficio sustancial para ellos. Otras once familias tenían previsto recibir tierras hasta mediados de 2024, pero la dimisión del primer ministro Ariel Henry y la continua violencia de las bandas provocaron graves retrasos. Las 31 familias restantes que tenían derecho a tierras renunciaron a esta opción debido a los retrasos y optaron por recibir equipos o acogerse al programa de pequeñas empresas. Mientras tanto, 26 familias más han recibido equipos agrícolas, y se planea una última ronda del programa de pequeñas empresas para 2024. Sin embargo, no está claro cuándo o si este programa seguirá adelante, dada la crisis actual. El deterioro de la situación política ha seguido afectando al campo, y el precio del gas y los alimentos sigue subiendo debido al dominio de las pandillas.

La continua lucha del *Kolektif* para asegurar la rendición de cuentas y obtener remediación por los daños sufridos ofrece lecciones clave para las comunidades y los defensores que buscan resolver disputas facilitadas por las IFI. Exploramos estas lecciones a continuación.

Lección 1: Un acuerdo firmado no es el final del proceso, sino el comienzo de otra lucha.

Dentro del ámbito relativamente nuevo de los mecanismos de rendición de cuentas no judiciales en las instituciones financieras, llegar a un acuerdo a menudo se presenta como el objetivo final de la resolución de disputas, e incluso puede considerarse una resolución exitosa por parte del mecanismo de rendición de cuentas (véase, por ejemplo, el Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco Mundial 2023). Sin embargo, en realidad es más preciso pensar en un acuerdo como el marco que define un proceso continuo de obtención de soluciones.

Los denunciantes y sus defensores internacionales no terminan su trabajo con la firma del acuerdo; deben pasar la ardua tarea de asegurar que se implemente en su totalidad. Los defensores deben planificar cuidadosamente el largo proceso de garantizar que la remediación llegue a quienes lo necesitan.

Comprensiblemente, es tentador pensar en un acuerdo como un punto final, ya que se requiere de mucho esfuerzo para alcanzarlo. Esto es especialmente cierto para las comunidades afectadas por el proyecto, que siguen soportando los impactos negativos incluso mientras participan en el proceso de rendición de cuentas.¹⁶ Aunque llegar a un acuerdo es un hito que merece celebración, el verdadero cronograma de un proceso de resolución de disputas se extiende mucho más allá de las etapas de negociación y acuerdo. Generalmente, la etapa de negociación en la resolución de disputas tiene un plazo definido. Según las reglas del MICI aplicadas en el caso Caracol, las negociaciones debían concluir dentro de 12 meses (aunque esto se extendió a 18 meses sin objeciones). En contraste, el cronograma para la implementación de los acuerdos es determinado caso por caso por la Junta Directiva del BID.

No obstante, la experiencia ha demostrado que la parte implementadora frecuentemente no cumple con los plazos estipulados. En ausencia de medidas legales, los actores con influencia sobre el cliente deben establecer consecuencias alternativas para los incumplimientos en la implementación. Estos actores pueden incluir a las IFI, que puede ejercer presión “desde arriba”, así como a los denunciantes y sus defensores, que ejercen presión “desde abajo” (Fox 2015).

Las instituciones financieras pueden imponer severas consecuencias “de arriba hacia abajo” a los clientes recalcitrantes, como la suspensión de la financiación del proyecto en cuestión, la imposición de sanciones, o la prohibición de futuros préstamos y otros recursos contractuales.¹⁷ Para las comunidades y los defensores, cualquier influencia sobre el cliente generalmente proviene de campañas mediáticas que amenazan la reputación de este. No obstante, el poder de la comunidad para “nombrar y avergonzar” puede verse limitado por varios factores, como los acuerdos de confidencialidad relacionados con los procesos de resolución de disputas, los riesgos de represalias y la falta de respuesta del Gobierno a las preocupaciones de la comunidad. En el caso de Caracol, todos estos factores limitantes estaban presentes.

Como una complicación adicional, las poderosas instituciones financieras pueden tener pocos incentivos para presionar a sus clientes gubernamentales a implementar acuerdos de remediación, a menos que el daño continuo represente también un riesgo para la reputación de la institución financiera. Por esta razón, las comunidades y sus defensores generalmente deben emplear un enfoque múltiple de defensa que incluye: exigir que los clientes cumplan con sus compromisos de remediación; instar a la institución financiera a usar su influencia y ofrecer apoyo técnico o financiero para la reparación; y ejercer presión pública.

Lección 2: El monitoreo y la incidencia continua son fundamentales para implementar los acuerdos de remediación.

El éxito en la implementación de la remediación depende de la supervisión y el apoyo continuos, tanto de los defensores como del mecanismo de rendición de cuentas que facilitó el acuerdo.

Los mecanismos de rendición de cuentas pueden desempeñar un papel importante para garantizar que la institución financiera obtenga información independiente sobre cómo va la implementación, en lugar de depender únicamente de los informes de sus propios clientes. En el caso Caracol, la autoridad del MICI para monitorear de manera independiente la implementación fue vital para lograr cualquier avance con el Gobierno haitiano, especialmente en lo que respecta a la cuestión de las tierras. Además, al convocar reuniones periódicas de monitoreo entre la UTE, el BID y el *Komite*, el MICI pudo facilitar la comunicación y la resolución, lo cual fue esencial para implementar un acuerdo complejo durante varios años. El estado independiente del MICI y la presencia de un mediador neutral permitieron que el *Komite* participara en las reuniones de monitoreo con mayor confianza en el proceso, lo que facilitó un progreso sustancial.

Aunque los mecanismos independientes de rendición de cuentas como el MICI proporcionan la estructura y el foro necesarios para el monitoreo, sus acciones por sí solas no son suficientes para implementar la remediación. Los defensores y las personas perjudicadas por la financiación para el desarrollo deben estar preparados para llevar a cabo su propio seguimiento y publicar sus conclusiones, incluso a través de campañas en los medios de comunicación, con el fin de ejercer presión tanto sobre el mecanismo de rendición de cuentas como directamente sobre las IFI. Además, los estudios realizados por el *Kolektif* y los defensores internacionales fueron cruciales para entender los impactos de los retrasos y destacar las dificultades experimentadas por los desplazados. Por ejemplo, comprender el impacto negativo en la seguridad alimentaria de no recibir tierra a tiempo fue un hallazgo crítico. La publicación independiente de estos hallazgos a través de campañas en medios de comunicación externos durante los últimos cinco años ha ayudado a presionar tanto al MICI como a la junta del BID para avanzar en la implementación (Bojarski 2022; Welsh 2022; Zabludovsky 2022).



El *Komite* fue apoyado durante cada reunión de diálogo por asesores locales e internacionales.

Crédito: Accountability Counsel

Lección 3: Los acuerdos de remediación deben tener en cuenta la posibilidad de desafíos para la implementación.

Un gran desafío para la efectividad del acuerdo Caracol fue que las formas de compensación ofrecidas dependían en última instancia de la estabilidad más amplia de la economía nacional. Las pequeñas subvenciones para empresas requieren un clima empresarial estable para proyectar ingresos frente a la inversión en productos. Las bombas de riego requieren combustible para funcionar. En ambos casos, la recesión económica hizo que estas opciones fueran menos valiosas para los beneficiarios. Sin otras redes de seguridad, las subvenciones para negocios se utilizaron para cubrir los gastos básicos, y el aumento de los precios y los bloqueos de combustible hicieron que el uso de combustible para el riego fuera insostenible.

Por esta razón, la compensación en el contexto de Haití debería haberse centrado en reemplazar el capital perdido de una manera que no dependiera de un clima de estabilidad, sino que devolviera los recursos que permitieran a las familias mantenerse. Avanzar hacia la compensación basada en tierra es un paso necesario, pero no suficiente, en esta dirección. La puntualidad es, en última instancia, un aspecto clave: a medida que empeoraban las condiciones políticas y económicas, aquellos que perdieron su capital quedaron sin medios para sobrellevar nuevas adversidades.

Muchos de los retrasos encontrados también fueron de naturaleza burocrática. El alcance de las barreras burocráticas para asegurar la tierra de reemplazo no estaba claro para el *Kolektif*, sus defensores ni el BID en el momento en que se firmó el acuerdo. Cualquiera de los retrasos iniciales en la implementación podría haberse evitado si las partes hubieran podido acordar no solo la forma de remediación, sino también el proceso por el que los individuos tendrían que navegar. Dado que los procesos burocráticos complejos son una parte previsible del trabajo con los gobiernos, los mecanismos de rendición de cuentas y las instituciones financieras deben anticiparse a ellos, y contar con la flexibilidad necesaria para ayudar a superarlos, como un componente para facilitar la remediación.

La última década de Haití se ha visto afectada por desastres naturales y desintegración política; sin embargo, las condiciones que hicieron que muchas de las opciones de remediación fueran menos útiles son las mismas que se pueden encontrar en muchas economías que aceptan préstamos de las IFI. A medida que los bancos de desarrollo buscan aumentar sus operaciones en áreas frágiles y afectadas por conflictos, es fundamental que consideren la complejidad adicional de remediar el daño relacionado con el proyecto en esos contextos.¹⁸ Los acuerdos de remediación deben avanzar hacia una compensación que tenga en cuenta la posibilidad de inestabilidad económica y política. Al reconocer estas posibilidades, la creación de una compensación adicional por los retrasos podría ayudar a incentivar una implementación más oportuna y completa.

Conclusión

El acuerdo de diciembre de 2018 tenía la intención de restaurar los medios de vida de los miembros del *Kolektif* y reparar la compensación inadecuada que originalmente recibieron cuando fueron desplazados. Pero en muchos sentidos, la remediación no abarcó lo suficiente ni fue entregada lo suficientemente a tiempo. Cuando las familias perdieron sus tierras, perdieron su capital y la capacidad de producir alimentos e ingresos a partir de un recurso que habían poseído. Estar separado de la tierra tiene profundos efectos sociales: la ruptura de los lazos sociales y familiares de apoyo en los que uno puede confiar, y las conexiones con la tierra que provienen de haber vivido en ella durante generaciones. La mano de obra asalariada, los préstamos a pequeñas empresas y el equipo agrícola no restauraron en última instancia lo que los agricultores perdieron cuando fueron desplazados por el Parque Industrial Caracol. E incluso aquellas familias que recibieron tierras de reemplazo se encontraron en posiciones de extrema necesidad durante los años entre su desplazamiento y la adquisición de tierras.

La realidad de estos desafíos no eclipsa este hecho: para 422 familias campesinas en las zonas rurales de Haití, organizarse, conectarse con socios internacionales y llegar a un acuerdo de remediación representa un logro improbable e impresionante.



El *Kolektif* y sus asesores celebran después de la aprobación del acuerdo.

Crédito: Accountability Counsel

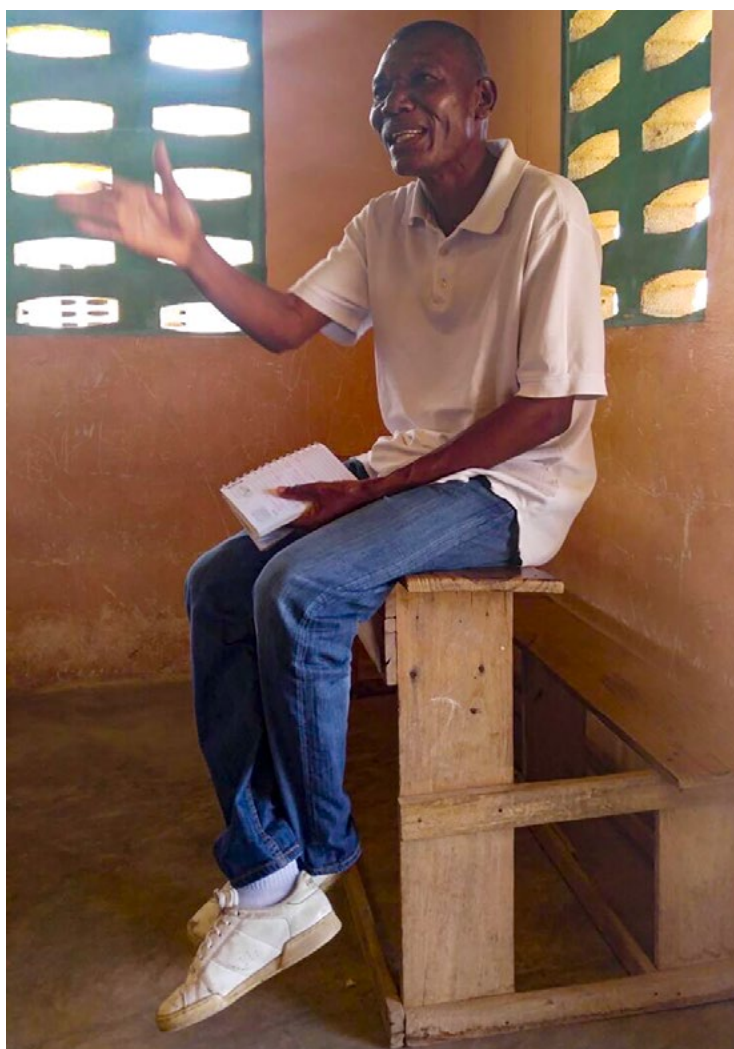
Buscar la remediación del daño causado a través de actores estatales o internacionales, incluidas las instituciones financieras, siempre es una lucha cuesta arriba. En los países donde el sistema judicial no es confiable, la posibilidad de obtener una remediación a través de un mecanismo de rendición de cuentas independiente como el MICI es una alternativa valiosa a las acciones legales formales. Además, a diferencia de los litigios, la resolución de disputas en un mecanismo de rendición de cuentas permite a las personas afectadas participar directamente en la negociación de una remediación por los daños que han sufrido.

Sin embargo, este caso demuestra que la lucha por la remediación no termina al momento de alcanzar y firmar un acuerdo. La incidencia y el monitoreo continuos son necesarios para garantizar que las IFI y el Estado cliente realmente cumplan con los términos de la remediación. En Haití, sin el monitoreo continuo del *Kolektif* y sus socios, muchos residentes no habrían recibido ningún beneficio del acuerdo.

Hasta el segundo trimestre del 2024, las familias que aún esperan sus beneficios no han perdido la esperanza. El *Komite* sigue reuniéndose con el MICI y el BID, y continúa articulando sus expectativas para la implementación de las últimas partes restantes del acuerdo. Han demostrado que lograr la remediación es posible, aunque es un camino largo y difícil. Y mientras la comunidad afectada desee continuar buscando la remediación que se merece, sus defensores seguirán y deben seguir participando en el proceso junto con ellos.

Llamamos al acuerdo una victoria, porque fue la primera vez que se logró algo así. Pero lo que decía el papel era el ideal: la implementación es otra cosa.

Milostène Castin, coordinadora de AREDE



Crédito: Accountability Counsel

Notas

1 Para obtener un resumen del acuerdo, consulte Accountability Counsel (2018). Véase también MICI (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación) (2019).

2 Para el texto completo de la denuncia, véase *Kolektif* (2017). Para obtener más información sobre el procesamiento de la denuncia por parte del MICI, consulte MICI (2017).

3 La Bahía de Caracol es parte del Área Protegida Tres Bahías, un esfuerzo de conservación para proteger y restaurar la vida silvestre marina en el norte de Haití. El Gobierno de Haití anunció oficialmente el parque el 9 de octubre de 2013.

4 Véase Beaubien (2013). El BID predijo menos empleos: 40 000 (BID 2012).

5 La cuantificación del BID y la UTE de los desplazados ha oscilado entre 366 familias y 442 familias, con un promedio de ocho miembros por familia. Un proceso de verificación realizado durante el diálogo identificó a 422 familias afectadas, que figuran como beneficiarias del acuerdo de diciembre de 2018.

6 La EIAS aceptó de manera independiente que la tierra es “muy fértil” (Koios Associates 2011, 27), que “las actividades económicas en y alrededor del sitio del proyecto pueden caracterizarse por cultivos de pancoger... [con estimaciones de que] el 50 % de los productos se venden comercialmente y el 50 % se consumen” (Koios Associates 2011, 96), y que estas comunidades “podrían ser muy vulnerables a los cambios sociales externos” (Koios Associates 2011).

7 El Plan de Acción para el Reasentamiento (PAR) reconoce el “cierre provisional” del sitio (Ministerio de Economía y Finanzas 2011). El PAR explica: “El proyecto comenzó oficialmente el 4 de enero de 2011. Hasta la fecha [Sept. 2011]: se ha completado la instalación de la valla temporal que delimita las 246 hectáreas...” (ibid. 14) y “desde el establecimiento del cierre provisional y la reciente llegada de oficiales de seguridad al sitio, la libre circulación ahora está limitada” (ibid. 24). Véase también el estudio de base en el anexo 1 del PAR (ibid. 39), que calculó la pérdida de ingresos a partir de enero de 2011.

8 Para indagar más sobre los problemas en rendición de cuentas con actores no estatales en Haití, véase Wisner y Concannon (2023).

9 Durante el debate general, se acordó que una compensación nueva y justa y un mecanismo de verificación para las personas que no hubieran recibido su compensación completa formarían parte de las demandas. Luego, utilizando un sistema de votación de comité, se solicitó a los participantes que se agruparan según sus opciones preferidas, entre: (1) tierra o vivienda para alquilar; (2) plan de desarrollo local y colectivo; (3) educación para niños; y (4) trabajos en el parque industrial. Luego se les pidió a estos grupos que eligieran una segunda opción entre las tres opciones restantes. Esto mostró un apoyo relativamente igual a las tres primeras opciones, mientras que solo cinco personas estaban interesadas en empleos en el parque industrial como segunda opción (y ninguna como opción preferida). Por lo tanto, esta última demanda se eliminó de la lista final de demandas.

10 Esta brecha de rendición de cuentas en USAID se está cerrando poco a poco: en 2020, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una legislación (ver Day 2021) que requiere que USAID establezca un mecanismo de rendición de cuentas independiente. A partir de 2024, el mecanismo aún se encuentra en la etapa piloto.

11 Además, no es común que las IFI participen en el proceso de diálogo del IAM o firmen el acuerdo final.

12 Para obtener un resumen del acuerdo, consulte Accountability Counsel (2018). Véase también MICI (2019).

13 Un enfoque riguroso para examinar la tenencia de la tierra no está del todo injustificado en Haití, donde la propiedad insegura e informal de la tierra es bastante común. Véase Smucker et al. (2000).

14 Aunque los terrenos públicos eran más fáciles de identificar y adquirir, conllevan otras desventajas. Como se mencionó anteriormente, la tierra en el norte de Haití ha sido repetidamente objeto de expropiaciones por parte del Gobierno. Además, los destinatarios de tierras públicas deben pagar tarifas de uso a perpetuidad.

15 Un seudónimo para proteger la identidad.

16 Aunque algunos mecanismos de rendición de cuentas tienen autoridad para recomendar la suspensión de proyectos que amenazan con causar daños ambientales o sociales irreparables, ninguno está obligado a hacerlo, y ninguna institución financiera está obligada a seguir la recomendación de su mecanismo de rendición de cuentas de suspender la financiación.

17 El pobre desempeño ambiental y social de un cliente, incluida la falta de mitigación o reparación del daño ambiental y social a las comunidades, puede constituir un incumplimiento del acuerdo de préstamo con la institución financiera de desarrollo (IFD). Las IFD tienen muchos recursos contractuales que pueden ejercer contra los clientes, pero rara vez aprovechan esta poderosa influencia. Véase Earth Rights International (2023), que analiza el hecho de que la Corporación Financiera Internacional (CFI) no haya utilizado las disposiciones contractuales en el caso Tata Mundra en el centro del litigio Jam v. IFC.

18 Por ejemplo, el Grupo del Banco Mundial tiene la intención de aumentar el financiamiento a los países debilitados por conflictos y violencia como parte de su “evolución” propuesta para enfrentar los crecientes desafíos globales. Véase, por ejemplo, el Comité de Desarrollo del Banco Mundial (2023, 18).

References

Accountability Console. s.f. "A Database of Human Rights & Environmental Grievances." <https://accountabilityconsole.com>.

Accountability Counsel y Arab Watch Coalition. 2022. *Our Last and Only Resort: What Happens When Development Goes Wrong in the Middle East and North Africa*. <https://aconsole-static.s3.us-west-1.amazonaws.com/media/public/stories/Our+Last+and+Only+Resort.pdf>.

Accountability Counsel. 2018. "Summary of the Agreement between Stakeholders in the Case MICI-IDB-HA-2017-0114: 'Productive Infrastructure Program' (HA-L1055 and others)." <https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2018/12/agreement-summary-pic-mici-bid-ute-kol-december-19-2018-final-eng.pdf>.

Acumen Capital Partners. 2024. "Acumen's Grievance Redress Mechanism for GCF-Funded Projects." <https://acumen-capitalpartners.com/grievance>.

Alphonse, Roberson. 2019. "La SONAPI écartée, l'UTE prend en charge le Parc Industriel de Caracol." *Le Nouvelliste*, 24 de julio. <https://lenouvelliste.com/article/204973/la-sonapi-ecartee-lute-prend-en-charge-le-parc-industriel-de-caracol>.

ANZ Banking Group Limited. 2024. "Our Approach to Human Rights." <https://www.anz.com.au/about-us/esg/fair-responsible-banking/human-rights>.

Beaubien, Jason. 2013. "Will 'Made In Haiti' Factories Improve Life In Haiti?" NPR, 14 de febrero. <https://www.npr.org/2013/02/14/170783895/will-made-in-haiti-factories-improve-life-in-haiti>.

BID. 2012. "IDB Hails New Industrial Park in Northern Haiti." Comunicado de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo, 22 de octubre. <https://www.iadb.org/en/news/idb-hails-new-industrial-park-northern-haiti>.

BID. 2014. "Policy of the Independent Consultation and Investigation Mechanism. Approved Version." https://accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/11/2014.12.17-MICI-Policy_approved-final.pdf.

BID. 2021. *Haiti Productive Infrastructure Program V HA-L1143 Environmental and Social Management Report (ESMR)*. V3.12. <https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1884470785-30>.

BID. 2023. "Support the Development of IDB's Framework to Support Populations in Fragile, Violent and Conflict-Affected Situations." <https://www.iadb.org/en/project/RG-T4371>.

BID. s.f.a. "Haiti Productive Infrastructure Program III (HA-L1091) Project Profile. Annex III – HA-L1091." <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38770014>.

BID. s.f.b. "Projects: Haiti." https://www.iadb.org/en/project-search?query=productive+infrastructure&f_sector=&f_country_name=Haiti.

BID. s.f.c. "Development of the Industrial Park Model to Improve Trade Opportunities for Haiti." <https://www.iadb.org/en/project/HA-T1074>.

- Bojarski, Sam. 2022. "Haitian Farmers Displaced by Caracol Project Still Await Compensation." *The Haitian Times*, 25 de febrero. <https://haitiantimes.com/2022/02/25/haitian-farmers-displaced-by-caracol-project-still-await-compensation>.
- Bradlow, Daniel. 2005. "Private Complainants and International Organizations: A Comparative Study of the Independent Inspection Mechanisms in International Financial Institutions." *Georgetown Journal of International Law* 36 (Winter): 403, 405–410.
- Chérestal, Kyssele Jean-Mary. 2015. *Building Back Better? The Caracol Industrial Park and Post-Earthquake Aid to Haiti*. ActionAid. <https://www.actionaidusa.org/publications/building-back-better-caracol-industrial-park-post-earthquake-aid-haiti>.
- Cohen, Marc J. 2013. "Diri nasyonal ou diri Miami? Food, Agriculture and US-Haiti relations." *Food Security* 5: 597–606.
- Comité para el Desarrollo del Banco Mundial. 2023. "Ending Poverty on a Livable Planet: Report to Governors on World Bank Evolution, for meeting on Oct 12." 28 de septiembre. <https://www.devcommittee.org/content/dam/sites/devcommittee/doc/documents/2023/Final%20Updated%20Evolution%20Paper%20DC2023-0003.pdf>.
- Day, Margaux. 2021. "U.S. Congress Requires USAID to Create an Accountability Mechanism." Accountability Counsel, 5 de enero. <https://www.accountabilitycounsel.org/2021/01/u-s-congress-requires-usaid-to-create-an-accountability-mechanism>.
- EarthRights International. 2023. Submission of EarthRights International on the Draft IFC /MIGA Approach to Remedial Action. <https://earthrights.org/wp-content/uploads/2023/04/ERI-Submission-on-IFC-MIGA-Remedial-Approach-4.20.23.pdf#page=32>.
- Fox, Jonathan. 2015. "Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?" *World Development* 72: 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>.
- Genovese, Kristen, Caitlin Daniel, Sarah Singh, y Mariëtte van Huijstee. 2016. *Glass Half Full? The State of Accountability in Development Finance*. Países Bajos: SOMO (Center for Research on Multinationals). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>.
- Grupo del Banco Mundial. 2024. "Fragility, Conflict & Violence, Overview." <https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview#1>.
- Jaramillo, Sara. 2023. "Making IAMs Accessible for all Communities." Accountability Console, 7 de agosto. <https://accountabilityconsole.com/newsletter/articles/making-iams-accessible-for-all-communities>.
- Johnston, Barbara Rose. 2000. *Reparations and the Right to Remedy*. Informe de la Comisión Mundial de Represas, Análisis Temático 1.
- Johnston, Jake. 2024. *Aid State: Elite Panic, Disaster Capitalism, and the Desire to Control Haiti*. Macmillan.
- Joos, Vincent. 2023. "Malediksyon: (Neo)Colonial Development, Disasters, and Countercapitalism in Northeastern Haiti." En *The Power of the Story: Writing Disasters in Haiti and the Circum-Caribbean*, editado por Vincent Joos, Martin Munro, y John Ribó, 62–77. New York and Oxford: Berghahn Books.

- Koios Associates. 2010. *Final Report: Development of the Industrial Park Model to Improve Trade Opportunities for Haiti*. <https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/08/EZSHARE-422213973-15.pdf>.
- Koios Associates. 2011. *Study of the Environmental and Social Impacts of the Industrial Park in the Region of Northern Haiti. Annex 2*. <https://www.iadb.org/Document.cfm?id=EZSHARE-1056243720-2>.
- Kolektif. 2017. Carta de denuncia dirigida a Victoria Márquez Mees, directora, Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, Banco Interamericano de Desarrollo. 12 de enero. <https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/08/1.12.17-Caracol-Industrial-Park-MICI-complaint-1.pdf>.
- Lauterbach, Claire. 2013. *Caracol Industrial Park: Social and Gender Impacts of Year One of Haiti's newest IFI-funded Industrial Park*. Washington DC: Gender Action. <http://www.genderaction.org/publications/caracol.pdf>.
- McIntire, Mike. 2016. "Haiti and Africa Projects Shed Light on Clinton's Public-Private Web." *The New York Times*, 16 de octubre. <https://www.nytimes.com/2016/10/17/us/hillary-clinton-cheryl-mills.html>.
- Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco Mundial. 2023. "First Two Independent Dispute Resolution Cases Reach Settlements." 15 de junio. <https://accountability.worldbank.org/en/news/2023/first-two-DR-cases-settlement>.
- MICI. 2014. "Policy of the Independent Consultation and Investigation Mechanism." Banco Interamericano de Desarrollo. https://accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/11/2014.12.17-MICI-Policy_approved-final.pdf.
- MICI. 2017. "Productive Infrastructure Program — Request II Consultation Phase — Monitoring of agreements." <https://mici.iadb.org/en/cases/MICI-BID-HA-2017-0114>.
- MICI. 2019. *Consultation Phase Report: Productive Infrastructure Program MICI-BID-HA-2017-0114*. Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, Banco Interamericano de Desarrollo. <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-124330786-1143>.
- MICI. s.f. *Haiti Consultation Phase Assessment Report MICI-BID-HA-2017-0114*. Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, Banco Interamericano de Desarrollo. <http://www.iadb.org/document.cfm?id=40874988>.
- Ministerio de Economía y Finanzas. 2011. *Plan d'action pour la compensation et le retablisement des moyens d'existence des personnes affectées par le projet du Parc Industriel de Caracol*. Unidad Técnica de Ejecución, Ministerio de Economía y Finanzas, República de Haití. <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-422213973-89>.
- Müller-Poittevien, Henri-Claude. 2012. "Haiti's Battle to Shake off a Poor Reputation." *Huffington Post*, 7 de septiembre. <http://huff.to/2atUb9p>.
- Park, Susan. 2022. *The Good Hegemon: US Power, Accountability as Justice, and the Multilateral Development Banks*. Oxford University Press.
- Shamsie, Yasmine. 2012. "Haiti's Post-Earthquake Transformation: What of Agriculture and Rural Development?" *Latin American Politics and Society* 54.2: 133–152.

- Smucker, Glenn, Thomas White, y Michael Bannister. 2000. *Land Tenure and the Adoption of Agricultural Technology in Haiti*. CAPRI Working Paper No. 6. <https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/125405/file-name/125406.pdf>.
- Sontag, Deborah. 2012. "Earthquake Relief Where Haiti Wasn't Broken." *The New York Times*, 5 de julio. <http://nyti.ms/1KUfV8T>.
- Suzuki, Eisuke y Suresh Nanwani. 2005. "Responsibility of International Organizations: The Accountability Mechanisms of Multilateral Development Banks." *Michigan Journal of International Law* 27 (1): 177-182.
- Tarter, Andrew, Katie Kennedy Freeman, Christopher Ward, Klas Sander, Kenson Theus, Barbara Coello, Yarine Fawaz, Melinda Miles, y Tarig Tagalasfia G. Ahmed. 2018. *Charcoal in Haiti: A National Assessment of Charcoal Production and Consumption Trends*. Washington DC: Banco Mundial.
- Trouillot, Michel-Rolph. 1990. *Haiti, State Against Nation: The Origins and Legacy of Duvalierism*. New York: Monthly Review Press.
- USAID. s.f. "Caracol Industrial Park. Background Information." <https://2012-2017.usaid.gov/haiti/caracol-industrial-park>.
- Welsh, Teresa. 2022. "3 Years On, Haitians Displaced by IDB Project Await Land Compensation." *Devex*, 23 de febrero. <https://www.devex.com/news/3-years-on-haitians-displaced-by-idb-project-await-land-compensation-102667>.
- Wisner, Sandra y Brian Concannon. 2023. "Debt and Dependence: Foreign Interference in Haiti and the Importance of Non-State Actor Accountability." *Northwestern Journal of Human Rights* 21: 185. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol21/iss3/1>.
- WWF. 2024. "Accountability and Grievance Redress Mechanism. Complaint Review Process." World Wide Fund for Nature. <https://www.worldwildlife.org/pages/accountability-and-grievance-redress-mechanism>.
- Zabludovsky, Karla. 2022. "These Haitians Were Children When A US-Funded Project Evicted Them From Their Land. They Can't Afford College." *BuzzFeed News*, 15 de junio. <https://www.buzzfeednews.com/article/karlazabludovsky/haiti-industrial-park-caracol>.

Últimas publicaciones de ARC

Working Papers

- Parra Bayona, Mauricio. 2024. "Tejiendo vínculos entre autoprotección y protección colectiva: la experiencia de ACADESAN en Colombia". Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 18*.
- Fox, Jonathan, Brendan Halloran, Alta Fölscher, y Rosie McGee. 2024. "Disentangling Government Responses: How Do We Know When Accountability Work Is Gaining Traction?" Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 17*.
- Abhishek, Shriyuta y Samir Garg. 2023. "Las trabajadoras comunitarias de salud como defensores de derechos: Explorando la identidad colectiva de las Mitanin de Chhattisgarh, India." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 16*.
- Gearhart, Judy. 2023. "Building Worker Power in Global Supply Chains: Lessons from Apparel, Cocoa, and Seafood." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 15*.
- Shukla, Abhay, Shweta Marathe, Deepali Yakkundi, Trupti Malti, y Jonathan Fox. 2023. "Activating Spaces, Scaling Up Voices: Community-based Monitoring and Planning of Health Services in Maharashtra, India." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 14*.
- Gearhart, Judy. 2023. "Local Voices, Global Action: Transnational Organizing in Apparel Supply Chains." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 13*.
- Gebremedhin, Abrehet. 2023. "Moving on Up: Multilevel Monitoring and Advocacy for Health Rights." Accountability Research Center. *Accountability Working Paper 12*.

Accountability Notes

- Parra Bayona, Mauricio, Elizabeth Moreno Barco, y Jonathan Fox. 2024. *Collective Protection for Communities and Rights Defenders at Risk: Lessons from Grassroots Advocacy in Colombia*, Accountability Research Center, *Accountability Note 13*.
- Fox, Jonathan, y Carlos García Jiménez. 2023. "Farmer Movement Oversight and New Approaches to Government Agriculture Programs in Mexico." Accountability Research Center. *Accountability Note 12*.
- Quiñones Mendoza, Helmer Eduardo. 2022. "The Ethnic Chapter of Colombia's Peace Agreement Five Years On: An Independent Assessment." Accountability Research Center. *Accountability Note 11*.
- Brophy, Sorcha, Veena Sriram, Haotian Zong, Chloe Andres, Maria Paz Mawyin, y Narayanan GL. 2022. "Heroes on Strike: Trends in Global Health Worker Protests during COVID-19." Accountability Research Center, *Accountability Note 10*.
- Swamy, Rakshita. 2020. "From Peoples' Struggles to Public Policy: The Institutionalization of the Bhilwara Framework of Social Accountability in India." Accountability Research Center. *Accountability Note 9*.

Ver todas las publicaciones en <http://accountabilityresearch.org/publications/>



American University
School of International Service
4400 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20016
www.accountabilityresearch.org